

## Política exterior: Un equilibrio pragmático

LUCÍA LUNA\*

Cuando el martes 10 de febrero de 1988 el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari, delineó su programa de política exterior, no vaciló en señalar que el reto principal al que había que enfrentarse era el de la soberanía.

Por lo menos 25 veces mencionó el concepto "soberano" o "soberanía" en un discurso no mayor de 20cuartillas, que pronunció al inaugurarse los trabajos de la Comisión de Asuntos Internacionales de su partido, en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

La nueva acechanza para la soberanía se derivaba, según su análisis, de una tendencia globalizante ante la que podían sucumbir tanto aquellos que se mantuvieran al margen, como los que se incorporaran sin un proyecto nacional definido. No sería el caso de México, aclaró, ya que además de ser una nación "viable" dentro de la nueva coyuntura, tenía una clara conciencia de su identidad nacional y de la dirección de su proyecto como nación.

Planteó que la política exterior mexicana debía pasar de un plano más bien defensivo a uno más activo, que no se limitara a reaccionar ante los acontecimientos externos, sino a influir en ellos.

Esta política exterior activa estaría, como siempre, basada en los principios de autodeterminación y no intervención, pero incorporaría, ante la exigencia de los nuevos tiempos, postulados como la cooperación internacional para el desarrollo, la resolución pacífica de los conflictos, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y la igualdad jurídica de los Estados.

La economía se mantendría en un proceso "irreversible" de apertura al intercambio con el exterior, pero siempre en el contexto de la legislación nacional. En términos diplomáticos se conservarían las ventajas de la negociación multilateral y se reforzarían las de tipo bilateral.

Capítulo especial merecieron las relaciones con Estados Unidos. Se intensificaría la labor para hacer valer los derechos humanos de los trabajadores migratorios. El narcotráfico, al que consideró como problema de seguridad nacional, se combatiría con una eficaz colaboración bilateral, pero bajo una estricta observancia de la soberanía y, acorde con la apertura, se buscaría un mejor acceso de los productos nacionales al mercado del Norte.

Este último propósito se llevaría a cabo "sobre una base estrictamente bilateral, ya que para México no resulta viable la integración de un mercado común a escala del Norte del continente".

Tampoco se habría de amarrar México a una única opción. Tendría que reforzar sus lazos a todos niveles con la Comunidad Europea, la Cuenca del Pacífico y, sobre todo, con América Latina y el Caribe. La sostenida democratización de la región en su conjunto y la pacificación de América Central, en particular, deberían ocupar los mejores empeños del próximo gobierno mexicano.

Para alcanzar todos estos objetivos, concluyó, reclamaría "imaginación, decisión, institucionalidad y patriotismo en el uso de nuestros instrumentos diplomáticos", con el fin de que "México fortalezca su bien ganado prestigio internacional", basado en una "historia de dignidad nacional".

### **La línea del equilibrio pragmático**

Pasadas las elecciones y proclamado presidente electo, Salinas de Gortari evidenció como prioridades diplomáticas las dos fronteras de México. Visitó Guatemala y Belice, y se reunió en Houston con el también recién elegido presidente estadounidense, George Bush.

Colaboradores cercanos de su equipo, particularmente José Córdoba Montoya, quien ya se perfilaba como su hombre de mayor confianza, asistieron a la cumbre del Grupo de los Ocho y acompañaron a Cuba al todavía titular de la Presidencia, Miguel de la Madrid. Manuel Camacho Solís, futuro regente de la ciudad de México, realizó una gira por Europa, donde privilegió los encuentros con círculos socialdemócratas.

La toma de posesión se constituyó en un escaparate de buena vecindad hemisférica con la asistencia de numerosos mandatarios de América Latina y el Caribe, entre ellos Fidel Castro, quien concitó las iras de la izquierda que vio en su presencia una convalidación del fraude electoral.

La inauguración presidencial sirvió también para una serie de reuniones bilaterales, multilaterales y paralelas cuya intención expresa era abrir cauces para futuras negociaciones en el ámbito latinoamericano y de las cuales, esta vez, Cuba no parecía estar excluida. Hasta Castro aprovechó para entrevistarse en privado con empresarios mexicanos en busca de nuevas inversiones.

Fue tanta la cordialidad, que más de uno la interpretó como la decisión de impulsar, ahora sí, una comunidad hemisférica. Quienes conocían los movimientos internos intuyeron que se trataba más bien de un gesto político de coyuntura, ya que difícilmente un equipo (el de Salinas) que se había opuesto en forma sistemática a la creación de un "club de deudores" y que no pocas veces había supeditado la política exterior a las necesidades del área financiera, preconizaría desde la Presidencia la opción latinoamericanista.

Un equilibrismo pragmático sería más bien la nueva tónica. Relaciones con todos, más cercanas o más lejanas, según las necesidades de cada momento. Participación en foros múltiples. Acercamiento a sectores política e históricamente controvertidos. Manejo de la palabra y de la imagen para evitar suspicacias o acarrear simpatías. Decisiones al vapor.

### **Bien con Dios y con el Diablo**

La voluntad de quedar bien "con Dios y con el diablo" se manifestó desde un principio con la inusitada asistencia de los principales jefes de la Iglesia católica a la inauguración del nuevo gobierno. "El Estado moderno es aquel que... mantiene transparencia y moderniza su relación con la Iglesia", dijo el recién ungido mandatario del país.

Y sí. De pronto el tema tabú y los encuentros vergonzantes con la jerarquía católica salieron a la luz pública. El nuevo secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, empezó a hablar de "condiciones básicas" para un diálogo Iglesia-Estado.

Para que el acercamiento se transformara en una relación viable había, nada más y nada menos, que reformar la Constitución. Los legisladores de los partidos Popular Socialista (PPS) y Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) manifestaron su más rotundo repudio, los de Acción Nacional (PAN) apoyaron la iniciativa, y los del entonces Partido Mexicano Socialista (PMS) decidieron analizarla. Los priístas se dividieron. Unos pidieron la reanudación inmediata de relaciones con el Vaticano y

otros hasta se declararon convencidos católicos. Algunos recalcitrantes consideraron que nunca habría quorum suficiente para lograr esta reforma.

Todavía en la segunda mitad de 1989 Gutiérrez Barrios seguía hablando de que no se contemplaban reformas a la Constitución, pese a que oficialmente el clero mexicano ya había pedido que se modificaran los artículos tercero, quinto, 24, 27 y 130. Volvieron las negociaciones subterráneas entre Iglesia y Estado. Los preladados entraron en un verdadero activismo político y a la cabeza estuvo el delegado apostólico Girolamo Prigione, ansioso de coronar sus diez años de estancia en México con el retorno al redil de la "oveja descarnada".

Sin prisas, pero con continuidad, avanzaron las negociaciones. A principios de 1991 Salinas nombró como su "representante personal" ante el Vaticano al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Agustín Téllez Cruces, y en mayo del mismo año visitó México, por segunda vez, Juan Pablo II, ocasión que muchos pensaron se aprovecharía para anunciar la reanudación de relaciones. Pero no. Como tampoco se hizo durante la visita que el presidente mexicano hizo al Pontífice en julio de 1991, durante su gira por Europa.

Fue hasta septiembre de 1992 cuando se anunció formalmente el establecimiento de relaciones entre México y la santa sede. La Constitución se modificó y Prigione se convirtió en el nuevo nuncio con la aspiración, además, de ocupar el decanato del cuerpo diplomático acreditado en México. Como embajador ante el Vaticano fue designado el ex secretario de Gobernación y reconocido masón, Enrique Olivares Santa Ana.

Fue la gran reforma de fondo en el ámbito de la política exterior mexicana. Lo demás fueron adecuaciones de forma que, no obstante, consolidaron el nuevo estilo en la proyección de México hacia el mundo: el pragmatismo.

### **La diplomacia, subordinada a la economía**

Ciertamente, como lo había enunciado Salinas durante su campaña, los tiempos habían cambiado. Y habrían de cambiar más durante los primeros años de su gestión. Lo que el mundo conoció como la perestroika acabó por derrumbar al bloque socialista (1989) y a la propia Unión Soviética (1991), arrastrando consigo todo el concepto de bipolaridad que regía las relaciones internacionales.

La guerra ideológica dio paso a la guerra de mercados y los bloques económicos que ya venían conformándose desde años atrás se perfilaron con nitidez. Desde el punto de vista geopolítico y económico, México se vio arrastrado en forma casi natural hacia el bloque de América del Norte. La unidad latinoamericana podía otra vez quedar para después.

Todo el aparato encargado de la política exterior mexicana se transformó para la coyuntura. Las decisiones centrales dejaron de ser prerrogativa de la Cancillería, para partir directamente de la Presidencia o de las secretarías de Hacienda o de Comercio. Las embajadas, sobre todo las más importantes, fueron ocupadas por personas que provenían del gabinete económico del sexenio anterior. Los principios quedaron relegados a las necesidades del proyecto económico: la renegociación de la deuda externa primero, y la negociación del Tratado trilateral de Libre Comercio, después.

No es propósito de este texto analizar las condiciones en que se dieron estas dos negociaciones. Por su importancia y vastedad cada una de ellas merecería un capítulo aparte. Se trata, simplemente, de resaltar decisiones paralelas que se tomaron en materia de política exterior y que desdican tanto de una tradición diplomática, como del discurso nacionalista y de principios que se sostiene.

Mal empezó por cierto, en términos diplomáticos, la renovada relación con el vecino del Norte. A escasos dos meses de la toma de posesión de Salinas, hubo también cambios en Washington: Reagan dejó el mando a Bush. Y Bush envió un nuevo embajador a México: John Dimitri Negroponte.

Presentado como "diplomático de carrera" por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Negroponte concitó el repudio no sólo de la oposición política, sino de amplios sectores críticos de la sociedad mexicana. Vinculado desde sus inicios en el servicio exterior estadounidense con los círculos de inteligencia, jugó un turbio papel tanto durante su estancia en Vietnam, en plena guerra, como cuando fue embajador en Honduras, país que convirtió en una base de ataque contra las fuerzas revolucionarias en América Central. Sus primeros contactos con México fueron a través del Consejo de Seguridad Nacional.

Pero aquí, aseguraron las autoridades que le dieron el beneplácito, no se comportaría de igual manera. Cierto. Negroponte, en un principio, hizo su mejor esfuerzo por mantener un perfil bajo. Al fin y al cabo tampoco existía una situación de conflicto ni México era Centroamérica. Y, discretamente, como corresponde a todo diplomático, podía realizar mejor sus tareas.

Dos años después la discreción se rompió estruendosamente, cuando se filtró un memorándum confidencial (Proceso, números 758 y 759) que el embajador estadounidense envió al subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, en el que sostenía que la firma del TLC pondría a México en manos de Estados Unidos y daba recomendaciones: había que asegurar la continuidad de la política económica de Salinas más allá del sexenio para ampliar la apertura a la inversión extranjera y modificar parámetros en materia de trabajo y ecología; paralelamente se iría logrando una orientación estadounidense en la política exterior mexicana.

El escándalo, por supuesto, fue monumental. La SRE desmintió con contundencia que el TLC pudiera modificar la orientación de la política exterior, ya que se trataba de "un simple acuerdo comercial", y pidió explicaciones al embajador estadounidense, las cuales parece que consideró satisfactorias. Hasta fines de abril de 1993, tres meses después que el demócrata William Clinton hubiera asumido la Presidencia de Estados Unidos, Negroponte seguía como embajador en México.

### **De Panamá al Pérsico, la política de la ambigüedad**

Que las observaciones del diplomático estadounidense no eran del todo ajenas a la realidad, lo demostraron los hechos. En mayo de 1989, en plena renegociación de la deuda y a raíz de la anulación de las elecciones en Panamá que encrespó la ira de Washington, la Cancillería mexicana emitió un comunicado en el que se leía textualmente: "Es lamentable que la situación panameña se haya visto agravada por la actitud personal del general Noriega, cuya reputación moral y ética es de desprestigio y que, hasta ahora, ha hecho prevalecer sus intereses particulares sobre los del pueblo panameño".

Según The New York Times y The Washington Post, a este comunicado antecedió una charla telefónica de diez minutos entre Salinas y Bush. Fuentes nacionales, por su parte, vieron en el lenguaje inusual de Relaciones Exteriores la mano del jefe de la Oficina de Coordinación de la Presidencia, José María Córdoba Montoya, pivote indudable de las relaciones entre México y Estados Unidos.

Esta vez la polémica llegó hasta las filas del partido en el poder. Acorralado por la prensa, el secretario Solana negó tanto que hubieran existido presiones por parte de

Estados Unidos, como que en el comunicado hubiera intervenido Presidencia. Aceptó que el lenguaje hubiera podido cuidarse más, pero recordó casos como los de Somoza y Pinochet en los que, dijo, "el lenguaje fue aún más brutal".

Prefirió, por el contrario, destacar que México había sido clave para sacar adelante en la Organización de Estados Americanos (OEA) una resolución que impedía que este organismo se convirtiera en una especie de tribunal electoral y, con ello, pudiera intervenir en los asuntos internos de las naciones miembros.

El daño, sin embargo, ya estaba hecho. El gobierno de Bush utilizó la declaración mexicana como una evidencia de que había consenso en América Latina sobre la necesidad de derribar a Noriega.

Cuando a fines de 1989 Estados Unidos invadió Panamá, México, como las demás naciones latinoamericanas, se rasgó las vestiduras, condenó el uso de la fuerza y trató de deslindar responsabilidades. Esta vez fue un comunicado de la Presidencia el que directamente aclaró que "el gobierno mexicano censuró la conducta del señor Manuel Antonio Noriega y reiteró la necesidad de enfrentar radicalmente el narcotráfico. Sin embargo, el combate a los delitos internacionales no puede ser motivo para intervenir en una nación soberana".

Sobre hechos consumados cambió la actitud de México. Aprovechando que su embajador en Panamá, Carlos Planck, estaba de vacaciones en el momento de la invasión, dejó que su representación se mantuviera indefinidamente acéfala y se negó a reconocer al gobierno de Guillermo Endara, por considerarlo "ilegítimo".

Lo poco que quedaba de las relaciones entre los dos países estuvo a punto de la ruptura en abril de 1990, cuando Panamá fue expulsado del Grupo de los Ocho, lo que groseramente fue reclamado por el autoimpuesto gobierno panameño como una iniciativa mexicana. Vino sin embargo un año después la primera Cumbre Iberoamericana y, pese a reiteradas imprudencias, Endara estuvo presente en Guadalajara como mandatario con plenos poderes. En 1991, después de la segunda cumbre celebrada en Madrid, México y Panamá restablecieron relaciones a nivel de embajadores. El "ilegítimo" Endara, seguía como presidente.

Ambivalente, por decir lo menos, fue también la actitud del gobierno mexicano ante la guerra del Golfo Pérsico. El 16 de enero de 1991, dos horas después de que se iniciara el bombardeo contra Irak, el presidente Carlos Salinas de Gortari envió un mensaje a la nación, más destinado a tranquilizar a los empresarios nacionales y a los inversionistas extranjeros, que a la población en su conjunto.

Dado que previsiblemente la guerra tendría efectos sobre el mercado petrolero, Salinas aseguró que se mantendría la estrategia económica, y que el país contaba con una oferta de hidrocarburos suficiente para garantizar el abasto interno de la población y cumplir con los compromisos externos. De darse un aumento en los precios internacionales del crudo, se manejaría racionalmente el ingreso adicional de divisas.

Anunció, además, que "México, por tradición y convicción, siempre ha condenado el uso de la fuerza y defendido la solución pacífica de las controversias. Ningún mexicano irá al Golfo Pérsico".

De falso lo acusó la oposición, particularmente los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya que México apoyó la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que autorizó el uso de la fuerza para desalojar a Irak de Kuwait. Señalaron además que el gobierno mexicano sí se había dicho dispuesto a enviar tropas al Golfo, y que favorecía la posición de Estados Unidos al aumentar las ventas de petróleo para la reserva estratégica de ese país.

Bastante difícil fue para el presidente desmentir estas acusaciones, cuando él mismo había declarado a un periodista británico, unos diez días después de la invasión

de Irak a Kuwait, que si el Consejo de Seguridad lo requería "estaríamos dispuestos a participar en cualquier forma". La información, que fue difundida en forma masiva por la agencia estadounidense AP, señalaba también, en boca del propio Salinas, que México había aumentado su producción petrolera en 100 mil barriles diarios "para exportarlos a precio de mercado a Estados Unidos y al mundo".

Como si fuera una entidad aparte, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI organizó un Foro Permanente por la Paz Mundial y convocó a una marcha "a todos los ciudadanos sin distinción" para condenar el uso de la fuerza en las controversias internacionales. Salinas se congratuló de esta marcha y de la "vocación pacifista" del pueblo mexicano. El dirigente nacional del PAN, Luis H. Alvarez, se excusó de asistir, "por compromisos previos", y Cuauhtémoc Cárdenas se negó a hacerlo, al señalar que si bien compartía el motivo de fondo, la marcha podía mal interpretarse como una expresión de independencia, cuando en realidad la posición oficial había sido de total subordinación a la política estadounidense.

Que el actual gobierno ha tratado al máximo de evitar cualquier colisión con su par estadounidense, quedó también de manifiesto al retirar su candidatura para ocupar nuevamente un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tal situación se dio precisamente poco después del conflicto en el Pérsico. México, que tenía un apoyo mayoritario, decidió a última hora retirar su candidatura y su lugar lo ocupó Venezuela.

Desde la creación de dicho órgano, México se había abstenido de postularse para ocupar uno de los diez puestos no permanentes, para evitar precisamente fricciones innecesarias con Estados Unidos, que es uno de los cinco miembros permanentes. Esta "prudencia" se rompió en 1981 -1982, cuando ante el irrompible empate entre Cuba y Colombia el entonces canciller Jorge Castañeda recomendó al presidente José López Portillo la postulación de México. El apoyo fue unánime y el desempeño más que decoroso.

Algunas fuentes afirman que esta vez se desistió porque prácticamente ya no se toma en cuenta la opinión de los diez miembros no permanentes, lo que equivale a ratificar que actualmente existe una sola voz de mando: la de Estados Unidos. De cualquier manera esta actitud se contradice con la propuesta de Salinas de adoptar una política exterior "que no se limite a reaccionar ante los acontecimientos externos, sino trate de influir deliberadamente en ellos".

### **Cuba sí, yanquis también**

Verdaderos actos de equilibrismo ha realizado el gobierno mexicano en el espinoso caso de Cuba. Punto nodal de su política latinoamericana, México siempre mantuvo buenas relaciones con la isla y defendió su derecho a la autodeterminación al grado de que en tiempos de López Portillo se consideró que lo que se hiciera en contra de los cubanos sería tomado como una afrenta contra los propios mexicanos.

Afin, por lo menos en las formas, inició Salinas su relación con La Habana. Castro asistió en medio de una estruendosa ovación a su toma de posesión y fue, sin duda, la figura central de la primera Cumbre Iberoamericana. Luego causó conmoción su inesperada asistencia a la cumbre del Grupo de los Tres (Colombia, México y Venezuela), realizada en Cozumel pocos días después de que el presidente estadounidense, George Bush, había condicionado su relación con los países de la región a la posición que asumieran ante el bloqueo contra Cuba.

En todas esas reuniones hubo una cordialidad manifiesta hacia el líder cubano, pero en todas trascendió, también, que hubo presiones para que "democratizara" su sistema político. En un desliz diplomático, el canciller Solana manifestó poco antes de

la cumbre de Guadalajara, que "a México le preocupa mucho el encerramiento de Cuba y su falta de flexibilidad".

Más allá del discurso, México ha mantenido una posición relativamente solidaria con La Habana. Reiteradamente ha pugnado por la reincorporación de Cuba a la OEA e, inclusive, en la Asamblea General de este organismo, el año pasado, se opuso a que éste se convirtiera en una especie de tribunal con facultades para sancionar a naciones "no democráticas".

En el aspecto económico, que es el que más afecta a Cuba, el gobierno salmista ha propiciado las inversiones provenientes de empresarios mexicanos. Inclusive el Banco Mexicano de Comercio Exterior ha facilitado al régimen de la isla una línea de crédito por 300 millones de dólares y se han realizado coinversiones, sobre todo en el ramo turístico. Lo que nunca se ha planteado es la posibilidad de que Pemex le venda petróleo a Cuba o que ésta se incorpore al Pacto de San José. Ese desafío sería evidentemente intolerable.

Tal parece, sin embargo, que Salinas se sintió obligado a compensar un tanto sus "debilidades" hacia la isla, sobre todo conforme iba avanzando la negociación del TLC. Así, en febrero de 1992 declaró a la revista estadounidense Newsweek que si bien México respetaba la soberanía de Cuba, también observaba con preocupación lo que pudiera pasar con su inestabilidad interna. "Castro -dijo- explicó su situación económica interna y cómo tratarán de revertirla. Se mostró confiado de que podría superarla, pero nosotros no".

Gran beneplácito causó esta declaración en círculos gubernamentales estadounidenses, y aunque la oficina de Comunicación Social de la Presidencia hizo acrobacias para tratar de darle otra interpretación, el golpe estaba dado.

Pero faltaba todavía lo peor. Primero se murmuró en los corrillos periodísticos y políticos y luego estalló a ocho columnas que Salinas se había reunido "en secreto" con dos de los más conspicuos representantes de la oposición cubana en el exilio: Jorge Mas Canosa, presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, y Carlos Alberto Montaner, dirigente de la Plataforma Democrática de Cuba y de la Unión Liberal Cubana.

Ante la inevitable evidencia, confirmada por sus interlocutores, la Presidencia de la República aclaró que el jefe del Ejecutivo nunca celebraba reuniones "secretas", sino "públicas" o "privadas" y que la reunión con los anticastristas había sido de esta última índole.

Más allá de agrandar profundamente a Bush y desagradar profundamente a Castro, posteriormente se supo que había sido el propio gobierno mexicano el que había convocado a los exiliados cubanos reputados por su trabajo sucio en favor de los servicios de la Inteligencia estadounidense, porque estos habían emprendido una campaña contra la firma del TLC.

Según la articulista Pamela S. Falk, del The Wall Street Journal, a cambio de que suspendieran dicha campaña el gobierno de Salinas se comprometió a negar a Cuba créditos gubernamentales a tasas bajas; a no renegociar su deuda; no incorporar a la isla al Pacto de San José; congelar el comercio con la isla a sus niveles actuales y a precios de mercado; no facilitar créditos a mexicanos que inviertan en Cuba.

Estas vez ambas partes negaron que se hubiera celebrado, ya fuera en términos formales o informales, dicho acuerdo. La Presidencia rechazó rotundamente que el TLC estuviera sujeto a cualquier tipo de negociación política. La que sí quedó instalada fue una oficina de la oposición cubana en México, que se dedica activamente a distribuir propaganda anticastrista en todos los medios nacionales.

Además, el gobierno mexicano que siempre había votado en contra de las resoluciones de censura hacia Cuba, en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas -foro en que el exilio cubano siempre ha desarrollado una intensa actividad de cabildeo- a partir de 1991 empezó a optar por la salomónica posición de la abstención, para gran beneplácito tanto de Bush como de los anticastristas. Nuevamente para tratar de equilibrar la jugada, casi inmediatamente después de los opositores Salinas recibió a Roberto Robaina, dirigente de las Juventudes Comunistas de Cuba, este año nombrado ministro de Relaciones Exteriores y miembro del Consejo de Estado, y considerado uno de los delfines predilectos de Fidel. A Robaina supuestamente Salinas le aseguró que la política hacia la isla no cambiaría.

Casi al mismo tiempo, el canciller Fernando Solana reiteró que "la ley Torricelli viola los principios esenciales del derecho internacional y, en especial, el de no intervención". Las componendas se perdieron en el ruido que había provocado el escándalo previo.

### **EU: escaramuzas sin querer**

Paradójicamente, a quien más se ha pretendido agradar, es con quien más escaramuzas se han librado en materia de política exterior. Y también es el ámbito en que más fuertemente se ha visto cuestionada la soberanía nacional.

A partir del encuentro del 22 de noviembre de 1988 celebrado entre Salinas y Bush, ambos ya como presidentes electos, en la capital del estado fronterizo de Texas, se empezó a hablar del "espíritu de Houston" que proclamaba la buena voluntad en las relaciones entre ambos países, y el compromiso expreso del presidente estadounidense de hacer de México una prioridad de su política exterior.

Puede decirse que Bush cumplió con su compromiso, sólo que muy a su manera. En las formas no puede negarse que hubo una cordialidad manifiesta, a veces hasta excesiva. En los hechos, ciertamente se dio a México un lugar prioritario, nodal para la política exterior estadounidense: el de la seguridad nacional.

No sólo el envío de Negroponte, defensor a ultranza de los intereses estadounidenses, sino el alto nivel que se dio a la séptima Reunión Binacional México-Estados Unidos en 1989, dieron fe de la importancia que el nuevo gobierno republicano daría a su vecino del Sur. La asistencia de James Baker (secretario de Estado), Nicholas Brady (Tesoro), Robert Mossbacher (Comercio) y Richard Thornburgh (Justicia), delinearon las dos grandes áreas en que se trabajaría: economía y seguridad, particularmente narcotráfico.

La relación económica aparte, el narcotráfico y concretamente el "caso Camarena" permearon toda la política exterior entre México y Estados Unidos durante el binomio Salinas-Bush, y acabaron por dar al traste con el proclamado "espíritu de Houston".

A escasas cinco semanas de haber entrado Bush a la Casa Blanca, México apareció en el informe anual del Congreso sobre los gobiernos que recibían ayuda material estadounidense para combatir el narcotráfico. Los congresistas se declararon "sorprendidos" por los esfuerzos mexicanos, pero dijeron estar preocupados porque "la corrupción oficial constituye uno de los más serios impedimentos para dar a la campaña mayor efectividad". Fue la primera tormenta. Tanto la Cancillería como numerosos legisladores mexicanos calificaron de "intervencionista" el dictamen.

Curiosamente, en los días previos al informe se dieron una serie de movimientos a nivel federal que parecían demasiado orientados a conseguir la aprobación estadounidense: el 23 de febrero se firmó un nuevo acuerdo de cooperación México-Es-



tados Unidos en materia de narcotráfico; el 24 se destituyó a Miguel Nazar Haro, jefe de Inteligencia de la policía y a quien los estadounidenses consideraban "un duro obstáculo"; se anunció un aumento en la pena para los agentes que se involucraran en el comercio de estupefacientes; se llevaron a cabo redadas en la frontera, y se anunció que cada tres meses la Procuraduría General de la República daría un informe sobre el avance en la guerra a las drogas. "Puras coincidencias", fue la escueta explicación de Relaciones Exteriores.

Nuevos nubarrones empezaron a aglutinarse a fines de ese año, cuando se dio a conocer que muy pronto saldría al aire, a través de la cadena NBC, la serie *Drug Wars: The Camarería Story*. Basada en el libro *Desperados* de la periodista Elaine Shannon, la serie buscaría, según la propia autora, plasmar los esfuerzos y la frustración que invadía a los agentes antinarcóticos cuando se enfrentaban a sistemas corruptos.

Cuando a principios de 1990 la miniserie llegó a más de 20 millones de hogares estadounidenses y a algunos mexicanos que contaban con servicio de cable, el cielo se puso ciertamente negro. El tema era abordado en forma bastante maniquea: todos los agentes de la DEA eran buenos y todos los mexicanos corruptos y malos. Se criticaba a Reagan por no haber sido bastante duro con su vecino del Sur por temor a que éste declarara la moratoria de la deuda externa, y se involucraba a importantes funcionarios mexicanos del sector de seguridad, entre ellos al ex secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui.

Esto, por supuesto, ya era suficientemente malo para el gobierno mexicano. Pero lo peor era que después de cada capítulo se entrevistaba a periodistas o funcionarios de la propia DEA para actualizar la visión sobre México en cuanto al combate a las drogas y la investigación del caso Camarena. Y las conclusiones eran coincidentes: pese a todos los esfuerzos, en ninguno de los dos ámbitos se había hecho lo suficiente.

Las dudas en cuanto a encubrimiento de la corrupción oficial llegaban hasta Salinas, y el periodista Brian Ross se dio el lujo de señalar como un elemento de sospecha el hecho de que las autoridades mexicanas no permitieran que aviones estadounidenses persiguieran a traficantes dentro del espacio aéreo nacional.

La embajada mexicana en Washington presentó las protestas del caso y el presidente Salinas declaró rotundo que para combatir el narcotráfico en México bastaban y sobraban los mexicanos. Los medios estatales de comunicación, *El Nacional* e *Imevisión*, realizaron reportajes "especiales" sobre la incapacidad del gobierno de Bush para combatir el narcotráfico a nivel continental y dentro de su propio territorio. Insinuaron, inclusive, que Camarena estaba coludido con las redes de la mafia.

Ante la creciente guerra verbal, James Baker y Fernando Solana intervinieron en el plano diplomático y re-hilvanaron la relación binacional. La serie, sin embargo, dejó en claro que había zonas muy oscuras en el caso Camarena, que la DEA había emprendido la llamada Operación Leyenda dispuesta a castigar hasta al último de los que hubieran intervenido en el caso, y abrió cuestionamientos sobre el verdadero papel que jugaban los agentes estadounidenses en territorio mexicano.

No mucho tiempo después empezaron a aparecer las primeras evidencias. Casi como una respuesta al periodista Ross, en abril se supo que dos meses antes el gobierno mexicano había autorizado al servicio estadounidense de Aduanas a perseguir a un avión colombiano, cargado con cocaína, en el espacio aéreo mexicano. El operativo, en el que participaron además la propia DEA y la PGR, desmintió las versiones oficiales de que en México sólo operaban los mexicanos.

En medio de los más agitados reclamos de la oposición para que el Ejecutivo informara sobre el papel de la DEA en México, la revista *Proceso* publicó una lista con los nombres de los 57 agentes acreditados, todos con inmunidad diplomática y

distribuidos en seis centros de operaciones dentro de la república. El personal encubierto era incalculable.

Sus funciones: detectar cultivos y pistas clandestinas; penetrar grupos de narcotraficantes y realizar operaciones de vigilancia y espionaje; procesar la información recabada y cruzarla para interferir embarques o realizar detenciones.

Cuando todavía no se acallaba el escándalo, se supo además que, acorde con la nueva política antinarcóticos del presidente Bush, un equipo de Inteligencia militar rastreaba desde la embajada estadounidense el espacio aéreo mexicano con autorización del gobierno.

El secuestro del médico tapatío Humberto Alvarez Macháin, y la detención en Estados Unidos de Rubén Zuno Arce, cuñado del ex presidente Luis Echeverría, ambos llevados a cabo por elementos de la DEA como parte de la Operación Leyenda, acabaron por derramar el vaso.

Las protestas fueron tantas que el 15 de junio de 1990 el subsecretario de Relaciones Exteriores, Sergio González Gálvez, convocó al embajador Negroponte para entregarle las nuevas reglas que normarían a partir de esa fecha la presencia y actividades de los funcionarios de la DEA en México. Filtraciones posteriores revelaron que, aunque en forma más discreta, militares y agentes antinarcóticos estadounidenses siguieron operando en territorio mexicano. Pasaron dos años de forcejeos más bien subterráneos hasta que estalló la bomba. El lunes 15 de junio de 1992, después de cinco meses de revisar el caso de Alvarez Macháin, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó, por seis votos contra tres, que el gobierno de Washington está facultado para secuestrar en otros países a ciudadanos extranjeros que hubieran cometido delitos en su contra, y llevarlos ante la justicia estadounidense.

Esta vez la respuesta de México fue contundente. En tono desusadamente duro, la Cancillería calificó de "inválida e inaceptable" la decisión de la Corte estadounidense, condenó como "criminal" el secuestro de Alvarez Macháin, anunció su decisión de revisar el Tratado de Extradición entre ambos países, y dispuso la suspensión de actividades de los agentes de la DEA en México hasta determinar nuevos criterios de cooperación.

Tan grave fue la decisión de los magistrados estadounidenses que no sólo México sino prácticamente todo el mundo la repudió, por considerar que no nada más atentaba contra el derecho internacional y la coexistencia civilizada de las naciones, sino de hecho legitimaba la "ley de la selva", es decir, que el más fuerte podía pasar por encima de toda normatividad.

En forma increíble y a pesar del respaldo de la comunidad de naciones, México mantuvo su actitud de firmeza escasamente 24 horas. El lunes 15 desautorizó a los agentes de la DEA y el martes 16 los volvió a autorizar, aunque aclaró que los términos de cooperación antinarcóticos serían revisados. La explicación que dio la Secretaría de Relaciones Exteriores fue que no se deseaba crear un vacío de poder que pudiera ser aprovechado por los narcotraficantes.

Fue la corroboración de que en ningún momento, por grave que fuera, el gobierno mexicano estaba dispuesto a enfrentar a su par norteamericano, aun cuando esto conllevara la violación de su soberanía. Porque debe señalarse que si bien el caso de Alvarez Macháin fue el más sonado, no fue el único. En igual forma fueron sustraídos del país José Contreras Subías y René Martín Verdugo Urquidez, también involucrados en el caso Camarena, así como Manuel Salazar, Ornar Ayala Mendoza y Teódulo Romo López, acusados de delitos comunes o relacionados con el narcotráfico.

La coyuntura fue aprovechada por organizaciones humanitarias para destacar también el maltrato que se da a los mexicanos al otro lado de la frontera, y la aplicación

discriminatoria de la justicia en caso de ser procesados. Constantemente llegan reportes de vejaciones, lesiones y hasta homicidios cometidos por los servicios de migración estadounidenses contra mexicanos que intentan cruzar ilegalmente la frontera, y en las garitas se han reportado no pocas violaciones territoriales en operativos de persecución. Las protestas han ido y venido, pero no han dado mayores resultados.

Según la Oficina de Defensa de los Derechos Civiles de mexicano-estadunidenses, unas 70 mil personas de origen mexicano se encuentran recluidas en cárceles de Estados Unidos. Siete de ellas están condenadas a muerte. El caso más sonado es el del neoleonés Ricardo Aldape, cuya ejecución ha sido postergada varias veces, por falta de contundencia en las pruebas. No tuvo la misma suerte, sin embargo, el potosino Ramón Montoya, quien fue ejecutado el pasado mes de marzo pese a la intercesión del propio Salinas de Gortari, ni el mexicano estadounidense Leonel Torres, también muerto con inyección letal, en Texas, el 12 de mayo.

Así las cosas, y pese a las espectaculares tormentas desatadas, todo volvió a su cauce y a debatirse en tediosos trámites burocráticos. Salinas se mostró dispuesto a que nada empañara la relación política y económica y, en plena crisis de Alvarez Macháin, visitó a Bush y se fue con él a ver un partido de beisbol.

La diplomacia "del bat" por lo visto dio resultados, ya que poco después, por disposición de Bush, Alvarez Macháin fue liberado y repatriado. En cambio, a los pocos días, Zuno Arce, quien dos años atrás había logrado superar una acusación de perjurio, fue declarado culpable como partícipe de la conspiración para asesinar a Camarena. Pareció como un reparto equitativo de uno y uno.

La DEA, sin embargo, no quedó satisfecha con estos resultados y anunció que abriría un tercer juicio, esta vez tirando muy alto, contra Manuel Bartlett Díaz, Juan Arévalo Gardoqui y Enrique Alvarez del Castillo, todos mencionados durante el juicio a Zuno Arce. El sistema político mexicano se estremeció hasta sus fibras más íntimas al ser tocados tres de sus más "distinguidos" representantes. La indignación no parece, empero, un elemento para impedir que en su momento el juicio siga adelante.

De nada sirvió que Salinas allanara todos los caminos y minimizara todas las ofensas; que realizara 11 visitas a Estados Unidos, modificara su política exterior y apostara su mejor esfuerzo a la reelección de Bush. La maquinaria del aparato de poder de Estados Unidos continuó implacable. Y, para colmo, Bush perdió.

### **Y ahora con ustedes, William Clinton**

Ahora, con William Clinton será cuestión de empezar de nuevo y remontar el estigma de haber apoyado al adversario. En materia económica ya hubo los primeros tropezones. Las negociaciones "paralelas" al TLC y el impuesto adicional a las exportaciones de acero evidencian que por el momento no hay ningún trato preferencial. El nuevo presidente estadounidense se comprometió, eso sí, a que no se repetiría un caso como el de Alvarez Macháin. El resto de su política exterior está todavía por definirse. El gobierno de Salinas está a la expectativa. Afortunadamente, el pragmatismo es muy maleable.

\* La autora es periodista. Desde hace 15 años colabora en la revista Proceso, donde escribe sobre temas internacionales y de política exterior.

Visitas de Carlos Salinas		
País	Realizadas	Recibidas
Estados Unidos	11	1
Venezuela	4	1
Francia	2	0
España	2	1
Inglaterra	2	0
Alemania	2	1
Colombia	2	2
Chile	2	1
Argentina	2	1
Brasil	2	0
Guatemala	2	2
Costa Rica	2	0
Perú	1	1
Belice	1	1
Ecuador	1	1
Jamaica	1	1
Honduras	1	1
Nicaragua	1	1
El Salvador	0	1
Bolivia	1	1
Uruguay	1	1
Paraguay	1	0
Canadá	1	0
Portugal	1	0
Bélgica	1	1
Suiza	1	0
Japón	1	1
Singapur	1	0
Australia	1	0
Rep. Checa y Eslovaca	1	1
Unión Soviética	1	0
Hungría	1	0
Dinamarca	0	1
Rep. Pop. China	0	1
Corea	0	1
Indonesia	0	1
Kuwait	0	1
Nueva Zelanda	0	1

*El cuadro fue elaborado con información de la Presidencia de la República. El listado comprende las visitas efectuadas de 1988 a marzo de 1993, y no incluye aquellas que se enmarcaron en reuniones multilaterales.*